

Señor (a)

JUEZ CONSTITUCIONAL DE TUTELA DE MANIZALES – REPARTO

La ciudad

El suscrito, **Juan Carlos Neira Santamaría**, identificado con cédula de ciudadanía como se indica al pie de mi correspondiente firma, actuando en causa propia, como **sujeto accionante**, me permito interponer **Acción Constitucional de Tutela**, en ejercicio legítimo de la Constitución Política de Colombia artículo 86, solicitando el amparo de mis derechos fundamentales trasgredidos, tales como: **(i)** dignidad humana, **(ii)** acceso a la igualdad, **(iii)** trabajo en condiciones dignas, **(iv)** debido proceso, **(v)** acceso a la carrera administrativa por mérito; así como la aplicación, **(vi)** a la honra, **(vii)** a elegir profesión u oficio y protección de los principios constitucionales de **(i)** confianza legítima y **(ii)** derechos adquiridos; contra la **Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC)**, identificada con **NIT. 800114312-5**, representado legalmente por Jimena Aristizabal López, en calidad de Directora General, o quien sus derechos represente para la presente acción y momento, como **sujeto accionado**; así como a la **Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC**, identificada con **NIT. 900003409-7**, representada legalmente por Fridole Ballén Duque, en calidad de Presidente, o quien sus derechos represente para la presente acción y momento, como **vinculada**; a fin de que se proceda **al nombramiento en periodo de prueba y concurrente posesión en empleo público**, de conformidad a los hechos, omisiones, fundamentos de hecho y derecho, pruebas y test de razonabilidad en mi favor, dados a conocer a continuación:

Problema jurídico

Se plantea el siguiente: ¿Ha vulnerado la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) derechos fundamentales del accionante con el **no nombramiento y posterior posesión**, en periodo de prueba en empleo público, conformando lista de elegibles debidamente en firme? Tarea es del suscrito probar en el a quo cada una de las vulneraciones del sujeto pasivo, y en consecuencia, convencer al juez del amparo de derechos en la praxis, como lo es el **nombramiento en periodo de prueba y concurrente posesión en empleo público**.

Status quo

A la fecha, transcurridos más de 60 días, la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) no ha procedido al nombramiento en periodo de prueba y concurrente posesión en empleo público al suscrito, el cual conforma **lista de elegibles en firme** desde el 27 de febrero de 2020, con código OPEC No. 63907, denominado Profesional Universitario, Código 219, Grado 02, del Sistema General de Carrera, para la Subdirección Jurídica. En ese orden de ideas, la entidad accionada ha tenido hasta diez días hábiles con posterioridad a la firmeza de la lista para realizar el nombramiento en periodo de prueba, superando el término injustificada, ilegítima, ilegal e inconstitucionalmente, razón por la que una vez realizadas diligencias previas para la conformación del acervo probatorio, así como el acontecimiento de una serie de hechos posteriores y favorables, surte la necesidad de acudir al medio por legitimación en la causa, inmediatez y subsidiariedad; razón por la que sólo la tutela garantizaría la efectividad de la medida de forma preferente.

Cabe indicar, lo que pretende la acción de tutela y el planteamiento del problema no es cuestionar la Resolución que suspendió mi nombramiento y posesión por cuestiones subjetivas e inmotivadas. El objeto de la presente es contar lo acontecido y a partir de ello evidenciar acciones y omisiones de la Dirección Territorial de Salud de Caldas y como esto ha generado perjuicios irremediables que no pueden ser atendidos, por la gravedad, situación y contexto, por otro medio más que por la acción de tutela.

Delimitación/Estimación de partes procesales

- **Accionante:** Juan Carlos Neira Santamaría, con CC. 1.110.527.674 de Ibagué (Tol)
- **Accionado(a):** Dirección Territorial de Salud de Caldas, con NIT. 800114312-5
- **Vinculado (a)*:** Comisión Nacional del Servicio Civil, con NIT. 900003409-7

Nota*: la vinculación del CNSC radica en la intervención *in limine* sobre los hechos y conformación de pruebas, acorde a la potestad constitucional deprecada en el artículo 130 y aspectos propios de su competencia (ver pretensión especial)

Requisitos de Procedibilidad

Respecto de la Procedibilidad:

- **Legitimación por activa:** la titularidad de la acción de tutela, se encuentra en causa propia. Encuentro vulnerados mis derechos y por tanto, conforme el art. 86 de la Constitución Política de Colombia, estoy legitimado para reclamar ante el juez en todo momento y lugar, mediante procedimiento preferente y sumario. En desarrollo de este precepto, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, plantea varios casos en los cuales, la acción de tutela puede ejercerse en nombre propio o a través de un agente o apoderado (ver Sentencia T-260 de 2018)

En el caso concreto se observa que el accionante –Juan Carlos Neira- es titular de los derechos que estima vulnerados al ostentar la calidad de elegible con lista en firme, sobre quien recae varios derechos adquiridos y otros fundamentales.

- **Legitimación por pasiva:** se ejerce ante la acción y omisión de la Dirección Territorial de Salud de Caldas. De conformidad con la T-260 de 2018 y demás de la Corte Constitucional, al tratarse de una persona jurídica facultada para prestar este servicio público, sus acciones u omisiones pueden generar una amenaza o perjuicio de las garantías fundamentales de los que acuden a esta.

En el caso concreto se observa que la entidad accionada –Dirección Territorial de Salud de Caldas- tiene el deber legal de cumplir un mandato normativo, debido a que este contempla garantías y derechos fundamentales de un particular. El incumplimiento al deber de nombrar y posesionar, existiendo una lista de elegibles en firme, la cual generó derechos adquiridos constitucional y legalmente protegidos, genera consigo la carga de entidad requerida en acción constitucional, mediante legitimación por pasiva.

- **Inmediatez:** según el artículo 86 de la Constitución Política debe entenderse, como un mecanismo de “protección inmediata” de los derechos alegados. En el caso en concreto, los derechos adquiridos se generaron desde el 27 de febrero de 2020, momento en el que cobró firmeza el acto administrativo de lista de elegibles. Transcurrido un término que supera la norma de nombramiento y posesión (Decreto 1083 de 2015), pero inferior a los 6 meses que recomienda la teoría de la inmediatez, se cumple este precepto.

En el caso concreto es oportuno, se ejerce en un término razonable desde que se expidió la lista de elegibles y quedó en firme, los posteriores nombramientos y posesiones en casos semejantes, como quiera que permite la protección inmediata de los derechos fundamentales trasgredidos y amenazados, generando protección actual, inmediata y efectiva de los derechos fundamentales.

- **Subsidiariedad:**

Idoneidad y eficacia: si bien, en principio proceden los medios ordinarios (para el presente caso acción de nulidad y restablecimiento del derecho), en el caso en concreto la entidad:

Por mala fe e indebido actuar de la entidad:

- Ha actuado de mala fe recurriendo a dilaciones para nombrar en exigencia de soportes documentales en varias oportunidades
- Quien ostenta el cargo objeto de debate, es quien afronta la mayor carga de proyección de actos administrativos respecto al Concurso, por cuanto labora en la Subdirección Jurídica en la entidad (Dirección Territorial de Salud de Caldas - DTSC)
- Ostenta relación cercana con el Subdirector Jurídico de la entidad, quien a su vez es su jefe directo.
- Quien afronta la mayor carga de proyección, análisis e injerencia respecto del empleo objeto de debate, es presidente de la Comisión de Personal de la DTSC, mismo que no solicitó exclusión mía en la lista de elegibles.
- Quien afronta la mayor carga de proyección, análisis e injerencia respecto del empleo objeto de debate, es segundo en mi lista de elegibles, motivo por el cual tiene interés directo en que yo, ocupando el primer puesto, no quede en el primer lugar.
- Quien afronta la mayor carga de proyección, análisis e injerencia respecto del empleo objeto de debate, se encuentra en encargo, motivo por el que tiene acceso decisorio respecto de lo que se realiza vía acto administrativo contra mi derecho adquirido de elegible.
- Quien afronta la mayor carga de proyección, análisis e injerencia respecto del empleo objeto de debate tiene un claro conflicto de intereses, y en vista de eso, abiertamente se sabe en la Dirección Territorial de Salud de Caldas que interpuso denuncia en mi contra, haciéndose pasar por anónimo, para simular no tener justamente el conflicto de intereses ni incurrir en calumnia.
- Quien afronta la mayor carga de proyección, análisis e injerencia respecto del empleo objeto de debate, de alguna manera tiene injerencia con Jhoan Fernando Vidal, quien **supuestamente** proyectó (único documento que ha proyectado en el concurso respecto de un elegible el Subdirector Jurídico) por lo que no existió ninguna garantía en el procedimiento tendiente a mi nombramiento y posesión, ni tampoco lo habrá en el tránsito de reposición.

Por el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica:

- Aun existiendo el medio de control vía acción de nulidad y restablecimiento de derecho, actualmente existe impedimento legal para acudir a este medio debido a que sólo las acciones de tutela y habeas corpus se encuentran en posibilidad.
- Aun si se pudiese la simple nulidad, ello no restituye el derecho, por cuanto dicho medio de control no sirve, pues lo que se exige en tutela es que se protejan y restituyan derechos vulnerados.
- Aun si se permitiere la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prontamente, para acudir a este se requiere agotamiento de vía gubernativa como un precepto de carácter formal y procesal en el campo jurídico, lo que sería imposible ahora porque los términos de las actuaciones y trámites administrativos se encuentran suspendidos (ver hechos y pruebas)
- Y la cereza del pastel está: la emergencia económica, sanitaria y ecológica depende del avance y desarrollo de la pandemia, que según la Organización Mundial de la Salud, para estudios en Colombia, se encuentra en fase II, es decir, de crecimiento, por lo cual se supone más tiempo extendido de la medida.

Eso quiere decir, que en todos esos escenarios no puedo acudir al medio ordinario que provea el CPACA, y que aun así, tengo derechos fundamentales y adquiridos que se encuentran claramente vulnerados, motivo por el que el factor subsidiario de la tutela es indiscutible. Además de ello, derechos fundamentales como el de la honra y otros como la

buena fe, confianza legítima y demás, no se garantizan con un medio judicial de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, puesto que el perjuicio sería irremediable y se extiende en el tiempo la vulneración.

En ese sentido concluyo el presente punto con la siguiente:

¿Me espero a que se resuelva un recurso que (i) no es obligatorio según el CPACA, (ii) no cuenta con garantía de objetividad para resolverse, (iii) tiene suspensión de término según norma de alta jerarquía (Decreto 491 de 2020), para que después de transcurrido bastante tiempo a que se supere la emergencia no cumpla el requisito de inmediatez?

¿Me espero a que pueda interponer acción de nulidad y restablecimiento del derecho teniendo en cuenta que la lista de elegibles tiene duración de sólo dos años y ya está contando el tiempo desde principio de año, sin que sepa ni pueda acudir a dicha instancia porque no existe posibilidad por emergencia de SARS-CoV-2? Y supongamos que así fuera...

¿Tengo que aguantar que mis derechos fundamentales como ciudadano y connacional colombiano se vean afectados, a la honra, a la confianza legítima, al trabajo, a escoger profesión u oficio, y el conjunto de derechos adquiridos del elegible con lista en firme por el sólo hecho que a una entidad como la Dirección Territorial de Salud de Caldas le resulta conveniente, para favorecer un protegido y de sus gustos, torpedear por los medios administrativos, jurídicos y por vías de hecho mi nombramiento y posesión? Les llamo, les he escrito, he recurrido, he entregado lo que me han pedido en varias ocasiones y además gané el concurso, imposible más, pues estoy seguro que si hubiera concursado para esa entidad pero en otro empleo público, no habría pasado esto, pues el segundo en lista no sería quien ostenta conflicto de interés y no se habría acudido a todas las artimañas acontecidas.

Por las anteriores razones es indudable que no tengo otro camino más que la tutela, pues es la idónea y eficaz para proteger mis derechos, es que no tengo más forma, más teniendo en cuenta que alego **derechos adquiridos por ser elegible con lista en firme**, (en ese sentido mi debate no es cuestionar el contenido de las suspensiones de la DTSC – téngase en cuenta el planteamiento del problema previamente expuesto de mi parte) y como deseo acceder al derecho a la administración de justicia y que se estudie el caso, espero exista procedencia de la tutela y en consecuencia se tenga en cuenta lo siguiente:

En consecuencia, se desarrolla el contenido relacionado en el introito, así:

Hechos y Omisiones

1. Me presenté a concurso de Mérito, contenida en Convocatoria No. 698 de 2018- Convocatoria Centro Oriente, específicamente para el empleo público con código OPEC No. 63907, denominado Profesional Universitario, Código 219, Grado 02, del Sistema General de Carrera, para la Subdirección Jurídica de la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC), con única vacante para optar.
2. Cumplidas las fases del concurso, y una vez realizados los estudios respectivos por parte de la CNSC y la Universidad Libre de Colombia, obtuve un puntaje total de 71,39, constituyendo lista de elegible como único conformante para única vacante, obteniendo por antonomasia, el primer puesto (ver prueba)
3. Todas y cada una de las etapas del proceso de Selección, fueron verificadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad Libre de Colombia, desde el momento de la Convocatoria hasta la firmeza de lista de elegibles. (ver prueba)



4. La fecha de la lista de elegible mencionada es del 14 de febrero de 2020, acto administrativo denominado Resolución No. CNSC – 20202230028095, emanado por el Comisionado Jorge Ortega Cerón, con fecha de publicación del 27 de febrero del mismo año. (ver prueba)
5. A la Comisión Nacional del Servicio Civil le pregunté, en derecho de petición, la fecha en que comunicará/publicará la lista de elegibles, para conocimiento de la DTSC y los demás interesados. Con respuesta del 12 de febrero de 2020, se indicó que pasado el 17 de febrero del presente año se realizaría ello, conforme la estructura del proceso y en cumplimiento de todas las fases del concurso. Lo anterior, sospechando un actuar de mala fe de la DTSC, teniendo en cuenta que ya conocía el actuar del señor Quiroga, de público conocimiento en la entidad.
6. Ahora bien, es de manifestar, la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) **no solicitó exclusión de lista de elegibles respecto a mi lista**, PUES TUVO CINCO (5) DÍAS HÁBILES PARA ELLO, sin proceder, aceptando que la Valoración de Requisitos Mínimos (VRM) y el análisis de antecedentes, realizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil estuvo adecuado, respecto de la experiencia laboral y la formación académica. (ver prueba)
7. Mediante Resolución No. 0790 del 12 de octubre de 2018, se conformó la Comisión de Personal de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, dentro de la cual se encuentra Freddy David Quiroga Páez como representante principal de los empleadores; que luego por elección, ostenta la calidad de presidente de la comisión. (ver prueba)
8. De conformidad con el art. 6º del Acuerdo 562 de 2016, que complementa la ley 909 de 2004, la solicitud de exclusión de lista de elegibles se puede realizar por las siguientes causas: (ver prueba)
 1. Fue admitido al concurso sin reunir los requisitos exigidos en la convocatoria.
 2. Aportó documentos falsos o adulterados para su inscripción.
 3. No superó las pruebas del concurso.
 4. Fue suplantada por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en el concurso.
 5. Conoció con anticipación las pruebas aplicadas.
 6. Realizó acciones para cometer fraude en el concurso.

Teniendo en cuenta que la Dirección Territorial de Salud de Caldas, no solicitó mi exclusión de lista de elegibles, quiere eso decir que no encontró que hubiere cometido ninguna de las anteriores, dando por aceptados todos los documentos aportados en la plataforma, mismos que luego entregué virtualmente, así que desde la conformación de lista de elegibles YA SABÍA CUÁLES ERAN MIS DOCUMENTOS Y LOS ANALIZÓ.

9. Las decisiones de la Comisión de Personal son colegiadas, es decir, necesitan mayoría más uno para contemplarse en acta, según orden del día que proponga el presidente de la Comisión de Personal, que para el caso de la DTSC es Freddy David Quiroga.
10. Como no fue adoptada dicha decisión de solicitarme exclusión de lista de elegibles por parte de la DTSC, entonces se acudió, al parecer, a la figura de “denuncia anónima”, para así evadir las implicaciones legales por calumnia o las demás derivadas del tipo penal contempladas en el Código respectivo.

11. Dentro de la lista de elegibles, en segundo lugar, se encuentra **Freddy David Quiroga Páez**, mismo que actualmente se desempeña en ENCARGO (desde hace más de dos años) para el empleo público con código OPEC No. 63907, denominado Profesional Universitario, Código 219, Grado 02, del Sistema General de Carrera, para la Subdirección Jurídica de la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC). EMPLEO PÚBLICO QUE GANÉ Y CURIOSAMENTE SE ME IMPIDE EL NOMBRAMIENTO Y POSESIÓN. (ver prueba)
12. El análisis deprecado de los “requisitos” previo al nombramiento, como bien puede verse, no correspondió a talento humano como indica la norma, sino a la Subdirección Jurídica, misma donde labora y muy seguramente (en la realidad proyectada) por el mencionado encargado del puesto objeto de debate.
13. Es demasiado llamativo que si la denuncia se allegó un día después de la firmeza de lista de elegibles, a la DTSC, esta no se haya basado en ello para solicitar exclusión de lista, basados justamente en la “duda razonable”, teniendo en cuenta que así lo contempla el procedimiento de la ley 909 de 2004.
14. Es la Comisión de Personal la encargada de solicitar exclusión de listas de elegibles en concursos de méritos de conformidad con la ley 909 de 2004 y sendas disposiciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
15. Encontrándose el 27 de febrero de 2020, en firme y publicada mi lista de elegible, el 28 de febrero, día siguiente, el señor Freddy David Quiroga Páez, segundo de mi lista de elegibles y actualmente en encargo en el empleo objeto de tutela, **aparentemente/presuntamente** me ha denunciado falsamente ante la Fiscalía General de la Nación, allegando el escrito “anónimo” a la Dirección Territorial de Salud de Caldas, aduciendo: ausencia de tiempos de cotización en mi historia laboral pensional, ausencia de cotización a mi historia del Régimen de Seguridad Social en Salud (RSSS), labores comunes entre las certificaciones y que soy representante legal de una Corporación en la que laboré.
16. Llamativamente dicha denuncia “anónima” aparentemente fue interpuesta en la ciudad de Ibagué, pero aparece con recibo y asignación única y exclusivamente en la ciudad de Manizales, mismo domicilio y municipio de trabajo del señor Quiroga.
17. A la Comisión Nacional del Servicio Civil le pregunté, en doble derecho de petición, así como le puse de presente la situación de no nombramiento y notificación de acto administrativo de suspensión de nombramiento y posesión emanado por la DTSC, **siendo resueltos ambos** el 01 de abril de 2020, indicándose que: **(i)** debió realizarse nombramiento y posesión en el empleo objeto de debate, acorde con el artículo 2.2.5.1.6., 2.2.5.1.7., y 2.2.5.1.8., del Decreto 1083 de 2015 y **(ii)** la remisión a la Dirección de Vigilancia y Carrera Administrativa, en ejercicio de las funciones expuestas en el artículo 2º de la Resolución No. CNSC 20196000055925 de 2019, en cumplimiento del artículo 12 de la ley 909 de 2004, para iniciar, sustanciar y fallar las actuaciones administrativas de carácter **sancionatorio por violación a normas de carrera o inobservancia de órdenes impartidas por la CNSC.**
18. La DTSC, en respuesta del 05 de marzo de 2020, requiere la documentación de experiencia laboral y formación académica, como quiera que la misma se encontraba en la plataforma SIMO, misma que observaron desde la Comisión de Personal de la entidad. Cabe mencionar, para esta fecha, ya tenían conocimiento de la “denuncia

anónima", motivo por el cual justificados en la verificación de requisitos, me requirieron nuevamente (en acción retardataria) los documentos.

19. Producto de lo anterior, el 11 de mayo de 2020, remití los documentos exigidos, así como la respuesta a la contestación anteriormente indicada, por medio electrónico institucional del DTSC.
20. Si bien, el artículo 2.2.5.1.5, del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017 dispone que procederá verificación de requisitos, por parte del jefe de la unidad de personal, antes del nombramiento, cabe indicar: **(i)** el acto administrativo que suspende se basó en un anónimo y no en un estudio detallado de los requisitos y **(ii)** fue expedido por la subdirección jurídica y no la administrativa y de talento humano; lo que supone que no se actuó acorde con el artículo en mención.
21. De conformidad con las normas de carrera administrativa, una cosa es la verificación de requisitos y otra de legalidad y cuestionamiento de documentos. De los requisitos es suficiente que se acrediten los mínimos exigidos para el empleo, los cuales se cumplen a la luz de TODO EL PROCESO DE CONCURSO ANTE LA CNSC. En lo segundo, la DTSC no es autoridad judicial para contrariar la veracidad del concurso ni cuestionar la legalidad de los documentos.
22. Como quiera que la verificación debe hacerse sobre los requisitos para nombramiento, según el artículo 2.2.5.1.5, del Decreto 1083 de 2015, las actuaciones de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, se realizan el mismo día en que me suspende, lo que supone que sin duda no procede a nombrar y posesionarme por el escrito anónimo, pues se encontraba predeterminado ese proceder, actuando de mala fe y retaliativamente con interés de parte claro, más aun cuando no había otra figura jurídica a la cual acudir, por no haber solicitado exclusión de lista de elegibles dentro de los cinco días siguientes a la firmeza de la lista.
23. Si bien, el numeral 18, del artículo 35 de la ley 734 de 2002, manifiesta que no se puede nombrar o elegir a personas que no reúnan requisitos constitucionales, legales o reglamentarios o darles posesión a sabiendas de ello, NO EXISTE ORDEN DE AUTORIDAD JUDICIAL, NI DISCIPLINARIA y mucho menos, fallo sancionatorio u otro de igual o mayor rango jurídico que le dé razón al escrito anónimo sospechosamente radicado, razón por la que ostento PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, BUENA FE Y LEGALIDAD Y/O VERACIDAD DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS. En consecuencia, no es aplicable para la Dirección Territorial de Salud de Caldas dicho artículo.
24. Partiendo del supuesto magno criterio de "duda razonable" (meramente subjetivo), tan sólo transcurrieron 24 horas de "análisis" y "duda razonable" para que el 12 de marzo de 2020, se expidiera por la Dirección Territorial de Salud de Caldas la Resolución No. 170 de 2020, mediante la cual se suspendió mi proceso de nombramiento y posesión, incumpliendo lo dispuesto en EL Decreto 1083 de 2015 y la Resolución No. CNSC – 20202230028095. El único argumento de la DTSC es la existencia de una denuncia anónima, de quien el único interesado es el señor Freddy David Quiroga Páez, segundo en la lista de elegibles y encargado en el empleo objeto de tutela (lista de elegibles).
25. El señor Quiroga Páez es presidente de la Comisión de Personal de la DTSC, por lo menos para la fecha de los hechos, como representante de los empleadores, está encargado en el empleo del cual gané el concurso y como si fuera poco, labora en la Subdirección Jurídica, teniendo acceso directo a la información, proyección o proyección aparente (a nombre de otro) y tiene directa relación con el subdirector jurídico que revisa los documentos, el señor Jhoan Fernando Vidal.

26. Como quiera que reúne todas las características indicadas en el numeral anterior, es el único que tiene interés de parte y con conflicto de intereses latente.
27. El pasado 24 de marzo, se expidió la Resolución No. 218 de 2020, por parte de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, mediante la cual suspendió todos y cada uno de los términos, trámites, nombramientos, actos de posesión y demás procedimientos del concurso de méritos, proceso de selección No. 698 de 2018, notificada electrónicamente a todos los elegibles en primer lugar, incluyéndome (ver prueba).
28. Dicha Resolución fue proyectada por Freddy David Quiroga Páez, y revisada por Jhoan Fernando Vidal Patiño.
29. Dos argumentos se expusieron en la motivación de la respectiva Resolución: **(i)** el principio de coordinación administrativa, puesto que como la Gobernación del departamento de Caldas, en comunicado de prensa informó de suspensión de términos, entonces la Dirección Territorial de Caldas también lo debía hacer. **(ii)** Así mismo, la necesidad de mantener los provisionales y encargados en los empleos y no nombrar a los elegibles, pues para la contingencia del COVID.19 se requerían personas con experiencia especialísima por el hecho gravoso.
30. A la Comisión Nacional del Servicio Civil le pregunté, en derecho de petición, la fecha en que comunicará/publicará la lista de elegibles, para conocimiento de la DTSC y los demás interesados. Con respuesta del 12 de febrero de 2020, se indicó que pasado el 17 de febrero del presente año se realizaría ello, conforme la estructura del proceso y en cumplimiento de todas las fases del concurso.
31. A la Comisión Nacional del Servicio Civil le pregunté, en doble derecho de petición, así como le puse de presente la situación de no nombramiento y notificación de acto administrativo de suspensión de nombramiento y posesión emanado por la DTSC, siendo resueltos ambos el 01 de abril de 2020, indicándose que: **(i)** debió realizarse nombramiento y posesión en el empleo objeto de debate, acorde con el artículo 2.2.5.1.6., 2.2.5.1.7., y 2.2.5.1.8., del Decreto 1083 de 2015 y **(ii)** la remisión a la Dirección de Vigilancia y Carrera Administrativa, en ejercicio de las funciones expuestas en el artículo 2º de la Resolución No. CNSC 20196000055925 de 2019, en cumplimiento del artículo 12 de la ley 909 de 2004, para iniciar, sustanciar y fallar las actuaciones administrativas de carácter **sancionatorio por violación a normas de carrera o inobservancia de órdenes impartidas por la CNSC.**
32. Así las cosas, repuse la decisión, el 18 de marzo de 2020, por medio electrónico, conociendo la Subdirección Jurídica, por parte de Jhoan Fernando Vidal, siendo jefe y relacionado directo con Freddy Quiroga, con clarísimo interés de parte y conflicto de interés.
33. A partir de la fecha y hasta ahora, no he obtenido ningún tipo de novedad en lo que concierne al recurso, incluso antes de las normas de carácter nacional en lo que concierne a las suspensiones de trámites administrativos y otros.
34. Debido al art. 6º del Decreto 491 de 2020, de carácter nacional, como consecuencia de la pandemia del coronavirus, se suspenden los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa, lo que supone que ni los recursos, ni las respuestas, ni mucho menos las acciones ante el contencioso administrativo podrán generarse, quedando desprovisto de mi parte de toda posibilidad de actuar

en dicha instancia, por cuanto el término de la decisión nacional es hasta que permanezca vigente la emergencia, lo cual puede ser de semanas o meses, teniendo en cuenta que estamos en inicio de crecimiento sin llegada a pico máximo de contagio, según la OMS, para Colombia.

35. Aun en el caso en que el recurso esté sin suspensión, no se ha aclarado el caso, teniendo clara la literalidad del Decreto de orden nacional, y aun así, no podría acudir a instancias de jurisdicción administrativa por lo contemplado en dicha norma, llevándose la Dirección Territorial de Salud de Caldas a un estado de perjuicio e ineffectividad de los medios ordinarios, sumada a las condiciones actuales judiciales en el país.
36. El gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Justicia y del Derecho expidió el **Decreto 491 de 2020**, mediante la cual fijó reglas, específicamente en el art. 14º, fija instrucciones muy claras, en el párrafo tercero, en el que establece que no se pueden omitir los nombramientos y posesiones cuando existan listas de elegibles en firme (ver prueba)
37. Como si fuera poco, **para evitar e cualquier manera nombrar y posesionar a los elegibles**, el 06 de abril de 2020, la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) impetró acción de tutela, contra el Presidente de la República de Colombia y los Ministros que suscribieron el Decreto 491 de 2020, solicitando que no se diera aplicación al art. 14, es decir, que no se nombrara ni posesionara a los elegibles, incluyéndose, porque habían dificultades operativas para el desempeño de funciones en materia de salud pública para beneficio de la entidad.
38. Sumado a ello, se solicitó una medida cautelar, para inaplicar a la mayor brevedad el Decreto 491 de 2020 del gobierno nacional.
39. El pasado 16 de abril de 2020, en nota televisiva ante el canal “Telecafé” se llevó la denuncia colectiva, que con nota de investigación periodística, se concluyó que se han cometido, desde hace varios meses hasta la fecha, irregularidades jurídicas y administrativas por parte de la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) frente al concurso Convocatoria 698 de 2018, incluyendo las suspensiones de los nombramientos y posesiones y las demás acciones para accionar y omitir el cumplimiento de lo establecido en las listas de elegibles (ver prueba).
40. El 22 de abril de 2020, la Secretaría de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, me notificó, así como a los elegibles, del fallo, en la cual **declaró improcedente** la acción de tutela instaurada por la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) contra la Nación-Presidente de la República y los demás Ministerios, por cuanto se ataca un acto administrativo de carácter general y abstracto.
41. En vista de lo anterior, y ante la presión mediática de medios de comunicación, la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), el conocimiento de entes de control, otras acciones de tutela y el recién conocido fallo de la Sala Civil de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales y los elegibles, no tuvo otra opción la Dirección Territorial de Salud de Caldas que expedir la Resolución No. 251 de 2020, en la cual se dejó sin efectos la Resolución 218 de 2020, y en consecuencia retoma, desde el 24 de abril los términos de nombramientos y posesiones relativos al concurso de méritos No. 698 de 2018 (ver prueba).
42. Dicha Resolución fue proyectada por la dupla de siempre, Freddy David Quiroga Páez y revisada por Jhoan Fernando Vidal Patiño.

43. En dicha Resolución, se reconoce la importancia de no desconocerse el contenido de un decreto normativo de carácter nacional, en el cual se fijan unos lineamientos expresos frente a los concursos de méritos y que por jerarquía de la autoridad que lo expide tiene prelación respecto de su aplicación **frente a los expedidos por autoridades del orden departamental o local.**
44. Una elegible, instauró acción de tutela **con idénticas pretensiones a la tutela que me encuentro interponiendo**, ante el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Manizales, en contra de la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC), en proceso 2020-0025, alegando vulneración a derechos fundamentales relacionados con la igualdad, honra, trabajo, libertad de profesión, ocupación arte u oficio, **TUTELÁNDOSE LOS DERECHOS y ORDEÁNDOSE** a la DTSC a informar sobre el nombramiento y posesión.
45. Por lo anterior, la Dirección Territorial de Salud de Caldas, mediante Resolución No. 253 del 24 de abril de 2020, nombró, y con Acta de Posesión No. 019 del 27 de abril de 2020, posesionó a la elegible en el empleo correspondiente, fruto del fallo de la acción de tutela.
46. En dicho fallo, se establece que es procedente la tutela y lo tutelado, acorde con lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia T-610 de 2017, respecto a la vía judicial contencioso administrativa sin ser idónea, cuando se trata de dilaciones de las entidades y las imposibilidades de definición judicial por circunstancias como las actuales comparado con los derechos vulnerados y otros.
47. Cabe resaltar, la elegible nombrada y posesionada como consecuencia del fallo de tutela ostenta un cargo prácticamente idéntico al que ganó. El de ella es: Profesional Universitario, Código 219, grado 02, con la misma asignación salarial, tan sólo cambia el número de OPEC y un par de funciones en la ficha. Existe entonces condiciones igualitarias.
48. He realizado, desde el momento en que quedé en lista de elegibles con firmeza, hasta la fecha, múltiples llamadas AL NÚMERO TELEFÓNICO 8801620 Y A LA LÍNEA GRATUITA 018000968080, sin que se me den razones de fondo, frente al nombramiento, la consecuente posesión, la continuidad o no en la reposición, la aplicación al Decreto 491 de 2020 del orden nacional ni el efecto benéfico del reciente fallo del Tribunal de Manizales, respecto de mí.
49. **No es posible interponer acción de nulidad y restablecimiento del derecho**, como medio judicial respecto de la situación (pues la simple nulidad no aplica), por cuanto se debe agotar el recurso, mismo que se suspende hasta “que se supere el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, tal como lo establece norma de mayor jerarquía, es decir, el Decreto 491 de 2020, siendo un aspecto suspensivo en el tiempo de larga espera y con incertidumbre, además, no existe garantía de objetividad hacia la respuesta al mismo por interés de parte y conflicto de intereses. No tengo más opciones judiciales efectivas y pertinentes.
50. La Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC), **presuntamente**, aprovechando esa situación, específicamente por el interesado que labora en la Subdirección Jurídica, para no terminar su encargo y quedar con el empleo (pues de todas maneras está de segundo en la lista), me ha denunciado ante la Fiscalía General de la Nación y presuntamente ante la Procuraduría, en aras de dilatar mi nombramiento y posesión, sin resolver el recurso y hasta que antes del vencimiento de la lista me genere temeridad y susto para desistir del cargo.
51. La Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) **presuntamente**, aprovechando esa situación, específicamente por el interesado que labora en la Subdirección Jurídica, para no terminar su encargo y quedar

con el empleo (pues de todas maneras está de segundo en la lista), ha intentado persuadir a mis empleadores, imprimiendo temeridad con redacción amenazante por el escrito anónimo de denuncia, para exigir información y documentación que es de carácter sensible sobre mi historia laboral, de cotizaciones de salud y hasta del secreto empresarial.

52. Las diversas actuaciones se están adelantando **presuntamente**, para generarme escozor y con ello desistir al nombramiento y posesión o dicho de otra manera, abandonar el derecho que me asiste para que lo ostente otra persona, que como bien se sabe es **aparentemente** quien se encuentra detrás de lo expuesto previamente como segundo de lista de elegibles, con carácter funcional en la Subdirección Jurídica, titular por encargo al mismo cargo que gané y objeto de tutela y directo interesado.
53. La Comisión Nacional del Servicio Civil, expidió el Criterio Unificado sobre Derecho del Elegible a ser Nombrado una vez en Firme La Lista, el 11 de septiembre de 2018, a cargo del comisionado Fridole Ballén Duque, reiterando que para el presente caso, ostento derecho consolidado y subjetivo a ser nombrado en periodo de prueba.
54. El Acuerdo 562 de 2016, de la CNSC, en consonancia con lo publicitado desde el Departamento Administrativo de la Función Pública, establece las reglas de uso de lista de elegible de conformidad con lo expuesto por la ley 909 de 2004, resaltando el deber de nombramiento y acceso al empleo, siendo garante la Comisión Nacional del Servicio Civil bajo el principio de legalidad del proceso de concurso desde su principio a fin, en todas y cada una de las etapas, incluso en ser vigilante de los nombramientos y usos de listas por las entidades nominadoras.
55. A la fecha no he sido notificado por la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC), para el nombramiento en periodo de prueba, aceptación del cargo y posterior posesión.

A partir de lo anterior elevo las pretensiones:

Pretensiones

1. **Amparar**, mis derechos fundamentales y sociales a la dignidad humana (artículo 1º de la Constitucional), acceso a la igualdad (artículo 13 Constitucional), trabajo en condiciones dignas (artículo 25 Constitucional), debido proceso (artículo 29 Constitucional), a la honra, a elegir profesión u oficio, al acceso a la carrera administrativa por mérito (artículo 40, numeral 7º y artículo 125 Constitucional); así como la aplicación y protección de los principios constitucionales de confianza legítima (Sentencia SU-913 de 2009 de la Corte Constitucional) y derechos adquiridos (Sentencia C-228 de 2011 de la Corte Constitucional).
2. **Ordenar**, a la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC), representado legalmente por Jimena Aristizabal López, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, realice las actuaciones tendientes para **mi nombramiento y posesión en periodo de prueba** en el empleo público, con código OPEC No. 63907, denominado Profesional Universitario, Código 219, Grado 02, del Sistema General de Carrera, para la Subdirección Jurídica conforme a la lista de elegibles conformada con Resolución No. CNSC – 20202230028095, emanado por el Comisionado Jorge Ortega Cerón, con fecha de publicación y firmeza del 27 de febrero del mismo año.
3. **Se prevenga** a la DTSC, para que evite recaer en la vulneración de derechos como los aquí expresados y los que tengan que ver con la presente acción de tutela.

De PETICIÓN especial (dar a conocer con el traslado, a la vinculada CNSC):

A la Comisión Nacional del Servicio Civil, para que se profiera, previo al fallo y en la oportunidad de contestación de tutela respecto de:

- Principio y presunción de legalidad y validez de los documentos de experiencia profesional y formación académica de los participantes en los concursos de méritos.
- Informe ejecutivamente que he cumplido todos y cada uno de las etapas del concurso, incluso la de Valoración de Requisitos Mínimos y de Análisis de Antecedentes.
- Establezca cuáles son los derechos del elegible, acorde con el criterio unificado y como debe procederse a nombramiento y posesión de las entidades una vez existe lista de elegibles en firme.

(Suplico a la CNSC acceda a estas tres pretensiones que son información de carácter pública, de gran utilidad para orientar al juzgador, sólo pretendo estos tres puntos respecto de la CNSC, en los demás no tiene legitimación en la causa por pasiva)

Fundamentos de Hecho

Antecedentes análogos/similitud de casos por hechos semejantes

Argumento jurídico: Es de manifestar, existen casos semejantes para este concurso (698 de 2018) y anteriores (428 de 2016), en los cuales, con lista de elegibles en firme, les tutelaron favorablemente mediante decisión por parte de jueces de tutela, quienes ampararon los mismos derechos esbozados en la presente acción, conforme a hechos parecidos y tipo de actuaciones dilatorias de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, con igualdad de criterio vacío, las cuales fueron decididas favorablemente a los accionantes. En consecuencia, se exponen las mismas como precedentes a modo de ejemplo:

- El día 08 de octubre de 2018, el Juzgado 01 Administrativo Oral de Bogotá, en acción de tutela con radicación 2018-0033900, amparó derechos, semejantes a los deprecados en la presente demanda constitucional, del accionante Roberto Carlos Bernal, y ordenó al IINS el nombramiento en periodo de prueba.
- El día 16 de octubre de 2018, el Juzgado 62 Administrativo del Circuito de Bogotá, en acción de tutela con radicación 2018-0033300, amparó derechos, semejantes a los deprecados en la presente demanda constitucional, del accionante Luis Carlos Forero Ballesteros, y ordenó al INS el nombramiento en periodo de prueba.
- El 23 de abril de 2020, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Manizales, en acción de tutela No. 2020-000025, amparó derechos, semejantes a los deprecados en la presente demanda constitucional, de la accionante Laura Cristina Gómez Solanilla, y ordenó a la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) el status quo a nombramiento y posesión en periodo de prueba, para un cargo prácticamente igual al mío.
- En consecuencia de lo anterior ¿Por qué ante un hecho semejante, en aplicación de la misma normatividad, no debería aplicarse el mismo sentido de fallo? La respuesta es dable a entender desde el principio de sana crítica del derecho, para lo cual el deber ser apunta a fallar favorablemente en los intereses del accionante. Por tanto, el despacho no debería fallar en desfavor por cuanto hay similitud que conlleva a precedente judicial.

Postura omisiva ante nombramientos por parte de la Dirección Territorial de Salud de Caldas/Incumplimiento Legal

Status quo/argumento opuesto: Los Actos Administrativos:

- La denuncia anónima en mi contra, radicada ante la Dirección Territorial de Salud de Caldas, en donde además de los documentos expuestos en los hechos, se radicaron varios de mis certificados laborales y se conocían los tiempos de labor (*se preparó la estrategia para "tener la motivación" del acto administrativo para impedir nombramiento y posesión*) Primer conocimiento de la entidad de mis documentos, extraídos de SIMO de la CNSC.
- Requerir en dos ocasiones mis documentos de experiencia profesional y formación académica, y además por dos oficinas diferentes, en periodos de tiempo inmediatos, la respuesta del 05 de marzo de 2020 de la Subdirección Jurídica y el requerimiento del 11 de marzo de la Subdirección Administrativa (*para dilatar el proceso de nombramiento*)
- Resolución No. 170 de 2020, de la DTSC. Mediante la cual suspende mi nombramiento y posesión, con motivación de un anónimo, interpuesto **presuntamente** por la única persona que tuvo acceso a mis documentos extraídos desde SIMO por el rol en Comisión de Personal (ver fecha de denuncia), empleado encargado en un cargo que gané y tras de eso siendo segundo de lista de elegibles con directo interés e incumbencia en las decisiones por estar justamente en la Subdirección Jurídica. **Se afecta derecho al buen nombre, buena fe, honra, debido proceso presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, derechos del elegible y lo expuesto en el Decreto 1083 de 2015, 760 de 2005, la misma lista de elegibles y la Constitución Política de Colombia.**
- Resolución No. 218 de 2020, de la DTSC. Mediante la cual suspende todos los nombramientos y posesiones, con motivación de un comunicado de prensa de la Gobernación de Caldas y la necesidad de seguir contando con los provisionales y encargados por ser idóneos para los puestos ofertados en el concurso. **Sumado a los anteriores, se afecta derecho al trabajo, a la igualdad, a la confianza legítima, derechos del elegible y lo expuesto en el Decreto 1083 de 2015, 760 de 2005, la misma lista de elegibles y la Constitución Política de Colombia.**
- Resolución No. 251 de 2020, de la DTSC. Mediante la cual deja sin efectos la anterior Resolución. Se han realizado todos los nombramientos y varias posesiones, pero a mí ni me han nombrado, motivo por el que están sosteniendo una "duda razonable" infundada para desacatar una serie de mandatos judiciales y además de eso, desacatando lo contemplado en el Decreto 491 de 2020. La DTSC no tiene como camisa de fuerza la Resolución No. 170 de 2020, sabe perfectamente que puede dejarla sin efecto y CUMPLIR LA LEY y LA CONSTITUCIÓN, así como lo hizo con otros elegibles del mismo concurso y hasta la compañera que ostenta el cargo prácticamente igual al que gané. **Se afectan todos los derechos y violan las normas expuestos a continuación:**

Fundamentos de Derecho

Respecto al derecho a la carrera administrativa

De conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, la carrera administrativa es un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y que ofrece estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. La finalidad de la carrera, según la Sentencia T-682 de 2016: “es que el Estado pueda contar con servidores cuya experiencia, conocimiento y dedicación garanticen, cada vez con mejores índices de resultados, su verdadera aptitud para atender las altas responsabilidades confiadas a los entes públicos, a partir del concepto según el cual al Estado Social de Derecho exige la aplicación de criterios de excelencia en la administración pública”.

Del mismo modo, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Sentencia C-040 de 1995, explicó detalladamente las etapas que, por regla general, conforman los concursos públicos para proveer los empleos de carrera, esto es, que debe estar precedida de las fases de (i) convocatoria, (ii) reclutamiento, (iii) aplicación de pruebas e instrumentos de selección y (iv) elaboración de lista de elegibles, enfatizando en que aquellas deben adelantarse con apego al principio de buena fe y los derechos a la igualdad y al debido proceso. Como consecuencia de lo anterior, cuando la administración luego de agotadas las diversas fases del concurso clasifica a los diversos concursantes mediante la conformación de lista de elegibles, está expidiendo un acto administrativo de contenido particular que genera derechos subjetivos que, por regla general, no pueden ser desconocidos por ninguna autoridad, a menos que sea necesarios por motivos de utilidad pública e interés social y siempre que medie indemnización previa al afectado.

Así pues, se considera que existe violación al derecho en comento, cuando de manera arbitraria la autoridad nominadora encargada de efectuar el nombramiento y posesión de quien figure en primer lugar conforme con el listado de elegibles, sin mediar justa causa para ello, se abstenga de darle estricto cumplimiento. Para la Honorable Corte Constitucional, el acto administrativo a través del cual se conforman las listas de elegibles dentro de un concurso de méritos, una vez en firme, crean derechos subjetivos de carácter particular y concreto que no pueden ser desconocidos, por lo que en dicha oportunidad expuso lo siguiente:

“Cuando la Administración asigna a un concursante puntaje al finalizar cada una de las fases que comprende el concurso, expide un acto administrativo de carácter particular y concreto, en la medida que surte un efecto inmediato, directo y subjetivo respecto del destinatario; lo mismo ocurre cuando consolida dichos resultados mediante la conformación de una lista de elegibles; acto administrativo que a pesar de su naturaleza plural en cuanto lo integra un conjunto de destinatarios, crea derechos singulares respecto de cada una las personas que la conforman (...) Por su parte, la estabilidad de la lista de elegibles en tanto acto administrativo particular y concreto se obtiene una vez este haya sido notificado al destinatario y se encuentre en firme con carácter ejecutivo y ejecutorio – Artículo 64 del C.C.A., caso en el cual no podrá ser revocado por la Administración sin el consentimiento expreso y escrito del particular -Artículo 73 del C.C.A.-, salvo que se compruebe que el acto ocurrió por medios ilegales o tratándose del silencio administrativo generador de actos fictos en los términos del artículo 69 del mismo estatuto sea evidente su oposición a la Constitución Política o a la Ley, contrario al interés público o social o cause agravio injustificado a una persona”

Frente al derecho a la igualdad

La igualdad es una garantía constitucional que se encuentra consagrada en el artículo 13 de la Carta Política de 1991, así mismo, jurisprudencialmente se han establecido diferentes elementos para su verdadera y efectiva aplicación. Así pues se tiene que la igualdad:

“La igualdad cumple un triple papel en nuestro ordenamiento constitucional por tratarse simultáneamente de un valor, de un principio y de un derecho fundamental. Este múltiple carácter se deriva de su consagración en preceptos de

diferente densidad normativa que cumplen distintas funciones en nuestro ordenamiento jurídico. Así, por ejemplo, el preámbulo constitucional establece entre los valores que pretende asegurar el nuevo orden constitucional la igualdad, mientras que por otra parte el artículo 13 de la Carta ha sido considerado como la fuente del principio fundamental de igualdad y del derecho fundamental de igualdad”

En el mismo sentido, se ha establecido que la protección del derecho a la igualdad implica el pleno disfrute de los derechos fundamentales de las personas, así:

“La protección material del derecho a la igualdad alude al compromiso de remover los obstáculos que en el plano económico y social configuran efectivas desigualdades de hecho, las cuales se oponen al disfrute efectivo del derecho, lo que hace necesaria la configuración de medidas que puedan compensar y sean defensivas, con respecto a personas y grupos ubicados en condiciones de inferioridad mediante el ejercicio de acciones positivas de las autoridades públicas”

Cabe señalar que el artículo 13 superior consagra el principio de no discriminación, el cual tiene por finalidad que no brinden tratos diferenciados injustificados por criterios raciales, familiares, ideológicos, entre otros. En este orden de ideas, la discriminación se presenta, cuando la diferencia de trato se hace sin fundamento constitucional que tenga un carácter objetivo y razonable.

En ese sentido, **Señor Juez**, en aras de materializar los nombramientos de aquellas personas que concursamos en la convocatoria Centro Oriente, varias entidades ya han efectuado los diferentes nombramientos, por ello le anexo el comunicado de prensa de la Gobernación de Caldas donde comunican en concordancia con el decreto expedido por el gobierno que le vengo mencionando con anterioridad, que ya efectuarán los diferentes nombramientos, y efectivamente ya han nombrado personas en dicha entidad.

Anexo a esto uno de los nombramientos de un funcionaria, en la Dirección Territorial de Salud de Caldas. Hago alusión a dicho nombramiento y otros de diferentes empleados, porque la Dirección Territorial de Salud de Caldas, me está violando el derecho a la igualdad ante la ley, al diferenciarme de todas aquellas personas que ya nombraron en diferentes entidades cuando la normatividad para este caso es igual, estando los mismos 10 días hábiles para nombrar una vez la lista de elegibles se encuentre en firme, días que reitero ya se agotaron.

Respecto al derecho a la honra

Se debe entender el término honra en el sentido de la estima y respeto que una persona adquiere por sus virtudes y méritos propios, por lo tanto el derecho a la honra comprende el derecho de toda persona a que se guarde esta estima y respeto adquiridos y además que no se afecte su honra sin una justa causa o razón comprobada”.
<http://docencia.udea.edu.co/derecho/constitucion/>

Señor Juez, los concursos de méritos tiene un gran soporte constitucional y normativo, tal y como se evidencia en lo dispuesto en el artículo 130 de la Constitución Política de Colombia y la ley 909 de 2004 entre otras; por lo tanto mi derecho fundamental a la honra se ve vulnerado de manera evidente, teniendo presente que la Dirección Territorial de Salud de Caldas, se encuentra irrespetando mi mérito y mi derecho adquirido el cual me gané de acuerdo a mis capacidades en el concurso descrito en el presente escrito tutelar.

Creo que es poco satisfactorio que al ser uno la persona AFORTUNADA, (No hay otra descripción a este logro) en ganar un concurso que miles de millones de personas año tras año se encuentran participando porque para nadie es un secreto que ingresar en carrera administrativa es de las estabildades más importantes en la vida laboral de una persona, y que ya habiéndome ganado con esfuerzo y dedicación este puesto, la misma entidad obstruya de manera flagrante los sueños y como no el MERITO, con el que me gane el puesto al que no me han querido nombrar.

Ahora, la emergencia sanitaria puede durar muchos meses más, la dirección territorial de salud no puede tener como excusa sus trabajos arduos en el tema de salud y dejando paralizado a un lado áreas de que también le atañe como entidad, en este caso un asesor jurídico, que sería el puesto que entraría a ocupar.

¿Será que un asesor jurídico no puede utilizar sus herramientas jurídicas y sus conocimientos para asesorar en un estado de emergencia? La entidad tiene excusas que me lo han manifestado de manera verbal y el hecho no quita que deben cumplir la normatividad y al día de hoy la están incumpliendo viéndose de manera evidente afectados mis derechos fundamentales. SEÑOR JUEZ, YO ME ENCUENTRO CON LA FORMACIÓN ACADEMICA Y PROFESIONAL, PARA ARTICULARME E INGRESAR DE MANERA INMEDIATA A LA ESTRUCTURA OPERATIVA DE LA ENTIDAD, CUMPLIENDO CON LAS FUNCIONES QUE MI CARGO TIENE ASIGNADO Y REEMPLAZANDO DE MANERA INMEDIATA AL ACTUAL FUNCIONARIO.

Además de eso, ser prejuizado por parte de una entidad como la Dirección Territorial de Salud de Caldas afecta mi honra, como si dos largos años de pruebas, proceso y requerimientos hayan sido insignificantes e ilícitos sólo por un anónimo. ¿Un anónimo con razones equívocas, incorrectas, mal redactadas y sin fundamento es suficiente para contrariar la licitud de un proceso de concurso y todo lo actuado? Es infame la actuación de la entidad. Ese es un mensaje que maraca hito, porque eso quiere decir que de ahora en adelante, los nombramientos y posesiones que la entidad no quiera realizar los podrá impedir mediante anónimos, lo cual es una abierta afectación a mi buen nombre, honra y condición humana.

Respecto a la libertad de escoger profesión, ocupación arte u oficio

Este derecho tiene que ver con el derecho al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad y asociación. Para su adecuada garantía la Constitución dice cuándo podrá intervenir exigiendo títulos de idoneidad, inspeccionando y controlando su ejercicio. <http://docencia.udea.edu.co/derecho/constitucion/>.

Señor juez, la libertad de haber escogido la carrera de derecho, y aún más la ocupación en ella que es hacer parte de un personal de planta de una entidad, en este caso una entidad territorial, se está viendo truncada, por la Dirección Territorial de Salud De Caldas, al no nombrarme en el puesto que con mérito gané; por ende esa libertad que tuve al haber concursado, se está limitando y en consecuencia se limita mi derecho a trabajar que ahora está trayendo consecuencias de pasivos, faltas de pagos de necesidades básicas y demás.

Señor juez, el principio del mérito se ve altamente violado, cuando la entidad territorial NO acata el cumplimiento de normatividad que lo obliga a posesionar a todos aquellos que nos encontramos a la espera de tan anhelado acontecimiento. Dicho principio lo ha reconocido la misma Constitución Política de Colombia y me permito hacer énfasis a un pronunciamiento del Consejo de estado sobre esto:

“PRINCIPIO DEL MERITO - Fundamento de la función pública. Lo garantiza el sistema de carrera administrativa / SISTEMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA - Objeto / CARRERA ADMINISTRATIVA - Objeto / COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - Naturaleza jurídica. Objeto. Integración. Marco legal El artículo 125 de la Constitución Política, establece el principio de mérito como substrato de la función pública; por virtud del referido principio el acceso, permanencia y retiro de un empleo oficial está determinado por las condiciones demostradas por el aspirante al momento del ingreso y durante la vigencia de la relación laboral. Dichas condiciones sólo pueden verificarse mediante mecanismos técnicos de administración de personal como el denominado sistema de carrera administrativa, que considera tanto organismos como procedimientos y existe para garantizar la igualdad de condiciones en el acceso al servicio así como la eficiencia de la función pública. Consciente de que el sistema de carrera sólo podía cumplir sus cometidos si era administrado por un órgano independiente del más alto nivel, el Constituyente de 1991, creó la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSS -(artículo

130), como el órgano responsable de “[a]dministrar y vigilar las carreras de los servidores públicos...”. <http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/PDF/11001-03-28-000-2010-00015-00.pdf>

Respecto del derecho al trabajo

El artículo 25 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación social, el derecho que tiene toda persona a un trabajo en condiciones dignas y justas, bajo una especial protección del Estado; lo cual implica la salvaguarda de las condiciones del trabajo en cualquiera de sus modalidades, mas no la obligatoriedad de ofrecer un trabajo a todos y cada uno de los ciudadanos.

El alcance del derecho fundamental al trabajo y la protección de su núcleo esencial, ha sido ampliamente desarrollado por diferentes pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional, entre ellos, la Sentencia No. T-611 de 2001, en donde se indica:

“El derecho al trabajo tiene una doble dimensión: individual y colectiva, reconocida en la Constitución. El aspecto individual se refiere a la facultad que tiene toda persona de elegir y ejercer profesión u oficio en condiciones dignas y justas. En la dimensión colectiva implica un mandato a los poderes públicos para que lleven a cabo una política de pleno empleo porque de lo contrario el ejercicio del derecho al trabajo se convierte en una simple expectativa (...) **La interpretación constitucional** recae sobre un objeto de mayor complejidad el derecho al trabajo como uno de los **valores esenciales de nuestra organización política, fundamento del Estado social de derecho**, reconocido como derecho fundamental que debe ser protegido en todas sus modalidades y asegurar el derecho de toda persona al desempeño en condiciones dignas y justas, así como los principios mínimos fundamentales a los que debe sujetarse el legislador en su desarrollo y la obligación del Estado del desarrollo de políticas de empleo hacen del derecho al trabajo un derecho de central importancia para el respeto de la condición humana y cumplimiento del fin de las instituciones. La interpretación que surge de la dimensión constitucional descrita no persigue la solución de un conflicto o diferencia entre el trabajador y el empresario para hallar la solución correcta sino pretende, la definición de campos de posibilidades para resolver controversias entre derechos o principios fundamentales. La protección del derecho al trabajo desde la interpretación constitucional tiene el propósito de optimizar un mandato en las más altas condiciones de racionalidad y proporcionalidad sin convertirlo en el derecho frente al cual los demás deben ceder” (negrilla fuera del texto)

Así las cosas, se decanta que lo que se protege por parte de la Carta Política, son las condiciones de dignidad y justicia, en el trabajo que desarrolle cada individuo, sin que ello implique intervención para garantizar el ofrecimiento pleno de acceso a un trabajo o labor, o la intervención para resolver conflictos puntuales de la relación laboral propiamente dicha.

Por otra parte se consagra la obligación social del trabajo lo que no quiere decir que no se pueda ejercer la vagancia o que no se pueda estar sin trabajar, pues este sería también un derecho de cada ser humano que la Constitución de un Estado democrático debe respetar. Entendemos que se trata al trabajo como una obligación social puesto que como lo entendemos hoy en día es presupuesto del desarrollo para el logro de la deseada calidad de vida y bienestar de la población”. <http://docencia.udea.edu.co/derecho/constitucion/>

Señor Juez, no se justifica de ninguna manera que la entidad para la cual concursé y en la que ocupé el primer lugar, a la fecha NO me haya nombrado, siendo clara la normatividad como se menciona en los hechos anteriormente descritos, que la entidad tenía 10 días hábiles para nombrar posterior a la firmeza de la lista y ya habiendo pasando los 10 días, la entidad haga caso omiso al nombramiento.

Es claro que al iniciar la emergencia sanitaria, muchas entidades pudieron quedar en limbo jurídicos, como es el presente caso en donde siendo la Territorial de Salud de Caldas, la entidad importante en el departamento para atender la presente emergencia, se centrara en todo (emergencia) MENOS en nombrar, pero ahora hay dos directrices claras donde guían a

las entidades a que **SIN EXCEPCION ALGUNA**, nombren y posesionen siempre y cuando la lista ya se encuentre firme como pasa en el presente caso.

Como se puede evidenciar he enviado múltiples correos, requerido por teléfono y acudido de todas las formas posibles para que cumplan la normatividad y ninguno de ellos ha sido resuelto. Actualmente señor juez como todas las personas, tengo gastos mensuales, como arrendamiento, tarjetas de crédito, servicios públicos y demás incrementados por motivos de la emergencia económica, social y ambiental, y al violarse el derecho al trabajo, se ve afectada mi economía y mi vida digna de manera flagrante, aun cuando tengo un empleo ganado y luchado y por negligencia de la entidad no puedo acceder a él.

Es cierto que la pandemia, nos ha afectado a todos en diferentes ámbitos, pero esto **NO implica** que se suspendan procesos y actuaciones administrativas tan importantes como es el caso de nombramientos a personas que previamente concursamos y ahora nos encontramos a la espera de una posesión en donde el Gobierno Nacional junto con la Comisión Nacional del Servicio Civil son claros al decirle a las entidades que deben de nombrar. ¿Es que acaso no estamos en presencia de los medios electrónicos para hacerlo? El mismo decreto 491 de 2020 del 28 de marzo, presenta un lineamiento conciso de que los nombramientos se deberán hacer por estos medios, por lo tanto la situación de emergencia que ahora estamos pasando no debe generar la violación a este derecho consagrado en la Constitución Política como fundamental.

Respecto al derecho fundamental al debido proceso

El debido proceso se define como la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los administrados, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la ley. Así las cosas, la Corte Constitucional en Sentencia T-957 de 2011 manifestó:

“La jurisprudencia constitucional ha señalado, de manera reiterada y uniforme que, en principio, la acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para resolver las controversias que surgen en el desarrollo de las actuaciones administrativas, toda vez que la competencia en estos asuntos ha sido asignada de manera exclusiva, por el ordenamiento jurídico, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, juez natural de este tipo de procedimientos, cuya estructura permite un amplio debate probatorio frente a las circunstancias que podrían implicar una actuación de la administración contraria al mandato de legalidad. **Del mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho fundamental supone que todas las autoridades judiciales y administrativas, dentro del ámbito de sus competencias, deben ejercer sus funciones con sujeción a los procedimientos previamente definidos en la ley, respetando las formas propias de cada juicio, a fin de que los derechos e intereses de los ciudadanos incurso en una relación jurídica cuenten con la garantía de defensa necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias o abusivas**, en el marco de la creación, modificación o extinción de un derecho o la imposición de una sanción. Bajo esa premisa, el derecho al debido proceso se manifiesta como desarrollo del principio de legalidad y como un límite al ejercicio del poder público, en la medida en que toda competencia asignada a las autoridades públicas, no puede desarrollarse sino conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, en procura de la garantía de los derechos de los administrados” (negrilla y subrayado fuera del texto).

Así mismo, frente a la noción de debido proceso como garantía constitucional, la jurisprudencia constitucional ha precisado que:

“La Corte ha entendido que forman parte de la noción de debido proceso y se consideran como garantías constitucionales que presiden toda la actividad de la administración desde su inicio hasta su culminación, los derechos de defensa, de contradicción, de controversia de las pruebas, de publicidad, entre otros, los cuales se extienden a todas las personas que puedan resultar obligadas en virtud de lo resuelto por la administración”

En la sentencia T-982 de 2004, la Corte explicó que la existencia del derecho al debido proceso administrativo, como mecanismo de protección de los administrados, se concreta en dos garantías mínimas a saber: (i) en la obligación de las autoridades de informar al interesado acerca de cualquier medida que pueda afectar; y (ii) en la adopción de dichas decisiones, en todo caso, se sometan por lo menos a un proceso sumario que asegure la vigencia de los derechos constitucionales de contradicción e impugnación.

En cuanto al principio de confianza legítima

La Corte Constitucional mediante Sentencia T-311 de 2016, respecto a la configuración del principio de confianza legítima, señaló lo siguiente:

“Para que se configure este principio la Corte ha decantado los siguientes presupuestos generales: (i) la necesidad de preservar de manera concreta un interés público, esto es, resulta indispensable para la administración generar un cambio en sus actuaciones en aras de proteger el interés general; (ii) la demostración de que el particular ha desplegado su conducta acorde con el principio de la buena fe; (iii) la desestabilización cierta, razonable y evidente en la relación entre la administración y los administrados; y (iv) la obligación de adoptar medidas por un periodo transitorio que adecúen la actual situación a la nueva realidad. En esa medida, las actuaciones de la Administración que generen un cambio súbito en las condiciones que regulan las relaciones con los administrados, en donde exista una expectativa justificada, deben estar precedidas de un periodo de transición donde se brinde a los particulares el tiempo y los medios necesarios para que se ajusten a la nueva situación jurídica. **Esa confianza, producto de la buena fe, da lugar a la aplicación de soluciones por parte del Estado**, sin que esto signifique una donación, reparación, resarcimiento o indemnización a favor del particular, ni el desconocimiento del principio del interés general (...) Ahora bien, no toda expectativa se encuentra jurídicamente protegida. La confianza debe ser justificada y solo **se protegen aquellas circunstancias “objetivas, plausibles, razonables y verdaderas que la motivan y explican, revistiéndola de un halo de credibilidad y autenticidad indiscutibles”**. En otras palabras, el principio de confianza legítima solo opera ante comportamientos justificados, razonables y genuinos, donde el particular tenga una expectativa justificada de que una situación de hecho o una regulación jurídica no serán modificadas intempestivamente; y no cobija aquellas circunstancias en las cuales la Administración ha establecido con anterioridad que puede modificar la situación individual en cualquier tiempo” (negrilla y subrayado fuera del texto).

De esta manera, en asuntos como los acumulados, se vulnera el principio de confianza legítima por parte de la administración cuando esta viene realizando actuaciones que favorecen al particular de manera repetitiva, como prorrogar por varios años el subsidio de vivienda otorgado, pero sorpresivamente y sin que medie anuncio alguno cambia substancialmente su manera de proceder, dando lugar a la pérdida de vigencia de los beneficios económicos concedidos.

Respecto de los derechos adquiridos/Buena fe

Establece la Sentencia de unificación SU-913 de 2009, en el tratamiento de los derechos adquiridos, una postura puntual sobre el carácter adquirido y una genérica sobre afectaciones conexas. En cuanto a lo primero, establece:

“las listas de elegibles que se conforman a partir de los puntajes asignados con ocasión de haber superado con éxito las diferentes etapas del concurso, son inmodificables una vez han sido publicadas y se encuentran en firme. Por otro lado, ha establecido que “aquél que ocupa el primer lugar en un concurso de méritos no cuenta con una simple expectativa de ser nombrado sino que en realidad es titular de un derecho adquirido”

Conforme a dicha postura, el o los derechos adquiridos es una institución jurídica como fenómeno consolidado, mediante el cual se salta de una mera expectativa producto de situaciones de hecho, a conformaciones en estricto sentido de derecho, de tal suerte que se adquieren de buena fe y carácter legítimo, tanto para ser protegidos, como ejercidos por el titular. En el caso en concreto, ello se consolida gracias a la lista de elegibles, en la cual me encuentro en primer lugar, que cobró firmeza el pasado 27 de febrero de 2020, y debidamente publicada en el Banco Nacional de Lista de Elegibles.

En cuanto al carácter genérico, ha dicho la Corte que cuando se impide el derecho legítimo que tienen las personas seleccionadas en los procesos de concurso de méritos a ser nombradas en los cargos para los cuales participaron, se vulneran sus derechos al debido proceso, a la igualdad y al trabajo. Incluso la misma jurisprudencia agrega:

“la Corte mediante la sentencia SU-133 de 1998, sostuvo que se quebranta el derecho al debido proceso -que, según el artículo 29 de la Constitución obliga en todas las actuaciones administrativas- y se infiere un perjuicio cuando el nominador cambia las reglas de juego aplicables al concurso y sorprende al concursante que se sujetó a ellas de buena fe. Así mismo, se lesiona el derecho al trabajo cuando una persona es privada del acceso a un empleo o función pública a pesar de que el orden jurídico le aseguraba que, si cumplía con ciertas condiciones -ganar el concurso-, sería escogida para el efecto. En idéntica línea se conculca el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución, cuando se otorga trato preferente y probadamente injustificado a quien se elige sin merecerlo, y trato peyorativo a quien es rechazado no obstante el mérito. La situación descrita, según la Corte, también: “equivale a vulnerar el principio de la buena fe - Artículo 83 de la Carta- al defraudar la confianza de quien se sometió a las reglas establecidas para acceder a un cargo de carrera administrativa después de haber superado todas las pruebas necesarias para determinar que él había ocupado el primer lugar y, por contera, los derechos adquiridos en los términos del artículo 58 Superior” (Subray. fuera de texto)

Test de Razonabilidad Jurídica

A partir de lo anterior y con el ánimo de generar praxis jurídica, se plantea el presente test, que de modo matricial, relaciona derechos/principios tutelados, hecho que genera, vulneraciones ocasionadas, consecuencias y el deber ser del derecho al caso concreto.

¿Es razonable la **omisión** de la Dirección Territorial de Salud de Caldas frente a las actuaciones tendientes al nombramiento en periodo de prueba del accionante?

Derechos/principios tutelados	Hecho que causa	Vulneraciones ocasionadas	Consecuencias	Deber ser constitucional
Dignidad humana (art. 1º. C.P)	Derecho fundamental de carácter intrínseco	Violación del derecho fundamental y humano del accionante.	Indignidad humana	Amparar la dignidad humana previamente vulnerada con respaldo constitucional, legal y jurisprudencial
Igualdad (art. 13º. C.P)	Derecho fundamental de carácter intrínseco	Violación del derecho fundamental y humano del accionante.	Desigualdad ante hechos y derechos aplicados similares	Amparar la igualdad como derecho constitucional, legal y jurisprudencialmente protegido.
Trabajo en condiciones dignas (art. 25º. C.P)	Derecho fundamental de carácter social	Violación del derecho fundamental y concreto.	Trabajo en condiciones de indignidad	Amparar las condiciones dignas de trabajo desde la esfera constitucional y jurisprudencial.
Debido proceso (art. 29º. C.P)	Derecho fundamental de carácter social	Violación del derecho fundamental y concreto.	Limitación del ejercicio del debido proceso	Amparar el debido proceso como el medio idóneo para el ejercicio proteccionista de derechos del accionante de forma constitucional, legal y jurisprudencial
Acceso a la carrera administrativa por meritocracia (art. 40º, num. 7; art. 125)	Derecho social de carácter constitucional	Violación del derecho fundamental, concreto y particular.	Desconocimiento de acceso a la carrera administrativa por mérito	Amparar la carrera administrativa y el mérito desde la órbita constitucional, legal y jurisprudencial ante el desconocimiento
Confianza legítima (S. T-311 de 2016)	Derecho de creación jurisprudencial conforme al Estado Social de Derecho	Violación del derecho fundamental, concreto y particular.	Desconocimiento de la confianza legítima en el Estado	Amparar la confianza legítima a partir del principio de buena fe, protegido de forma constitucional, legal y jurisprudencial
Derecho adquirido (S. SU 913 de 2009/SU 133 de 1998)	Derecho de creación jurisprudencial conforme al Estado Social e Derecho	Violación del derecho fundamental, concreto y particular.	Desconocimiento de derechos adquiridos y multivulneración por conexidad	Amparar el derecho adquirido desde la órbita <i>sine qua non</i> del acceso a la carrera administrativa por mérito

Pruebas

Documentales

1. Lista de Elegibles, Acto administrativo No. 20202230028095 del 14 de febrero de 2020.
2. Soporte digital del Banco Nacional de Lista de Elegibles –BNLE mediante la cual se publica la firma de lista de elegible
3. Prueba electrónica del **presunto** conflicto de intereses, contemplado desde funcionario de la DTSC.
4. Acuerdo 562 de 2016 de la CNSC.
5. Criterio Unificado, derechos del elegible 909 de 2004 y demás, de la CNSC.
6. Resolución de nombramiento en periodo de prueba de funcionaria con cargo idéntico al mío en la DTSC.
7. Escrito de denuncia y Anexos de denuncia “anónima” comunicada ante la DTSC.
8. Fallo de tutela, Rad. 2020-000025, mediante la cual tutela derechos a fin de nombrar y posesionar a funcionaria con cargo idéntico al mío en la DTSC.
9. Resolución No. 251 de 2020 de la DTSC
10. Fallo del Tribunal Superior de Distrito Judicial Sala Civil-Familia de Manizales, donde orden actuar en nombramiento y posesión conforme Decreto 491 de 2020. Rad. 2020-00047, declara improcedente tutela interpuesta por la DTSC.
11. Video de seguimiento periodístico del canal “TELECAFÉ” respecto del incumplimiento de la DTSC de los nombramientos y posesiones de la Convocatoria 698 de 2018 y otras irregularidades.
12. Notificación de acción de tutela de la DTSC contra la Presidencia de la República y los Ministerios para no acatar lo dispuesto en el Decreto 491 de 2020, en nombramientos y posesiones.
13. Decreto 491 de 2020
14. Presentación de documentos presentada a la DTSC.
15. Segunda solicitud de información y documentos de la DTSC
16. Respuesta a derechos de petición y notificación de seguimiento en vigilancia de carrera administrativa, contra la DTSC, por parte de la CNSC.
17. Respuesta derecho de petición de la DTSC del 12 de febrero de 2020.
18. Resolución No. 218 de 2020
19. Resolución o. 170 de 2020.

Juramento

En cumplimiento de los artículos 37 y 38 del Decreto 2591 de 1991, manifiesto bajo juramento que, con anterioridad a esta acción, no he promovido acción igual a los hechos aquí expuestos.

Competencia

Al juez de tutela asignado por reparto, en el distrito judicial de Manizales, atendiendo las reglas del Decreto 2591 de 1991

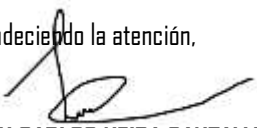
Notificaciones

Accionante: Carrera 21 C No. 53-07, Manizales (Cal). Correo electrónico: jcneira@ut.edu.co

Accionada: Carrera 21 No. 29-29, Manizales (Cal). Correo electrónico: notificacionesjudiciales@saluddecaldas.gov.co

Vinculada (CNSC): Carrera 16 No. 96 – 64, Piso 7, Bogotá D.C. Correo electrónico: notificacionesjudiciales@cncs.gov.co

Agradeciendo la atención,



JUAN CARLOS NEIRA SANTAMARÍA
C.C. 1.110.527.674 de Ibagué